



Columna

Arquitecto, master en Economía Urbana, exintendente de Antofagasta

Rodrigo Saavedra Burgos



El desafío crítico en la Región de Antofagasta

La discusión económica y ambiental en Chile ha dado un giro definitivo. Ya no basta con hablar de “mitigación”. Hoy, sectores estratégicos como la minería, la energía y el sector sanitario se enfrentan al desafío de transitar hacia la Sostenibilidad 3.0: una visión donde la empresa no solo busca ser “menos mala”, sino que se convierte en una solución activa para los límites planetarios. Sin embargo, este horizonte de progreso choca hoy con una muralla de hormigón: la asfixiante burocracia estatal, una problemática que se siente con especial dramatismo en la Región de Antofagasta.

“La ‘permisología’ en la región está poniendo en jaque inversiones críticas”.

En nuestra región, el corazón minero del país, el desafío es pasar de la extracción pura al “Capitalismo Regenerativo”. Ya no es suficiente con optimizar el uso de agua dulce; el estándar que el mercado global exige es la Minería Circular y la Extracción Directa de Litio (DLE). Estas tecnologías, cruciales para los salares de la zona, permiten devolver la salmuera a los acuíferos, protegiendo el balance hídrico. El objetivo es que, al cierre de una faena, el territorio antofagastino quede en mejores condiciones biológicas que antes.

Paralelamente, el Hidrógeno Verde (H2V) se alza como el motor de una nueva economía para el norte grande. El papel del gobierno no es solo atraer inversión, sino facilitar la infraestructura para que Antofagasta sea el hub de descarbonización del Pacífico. Asimismo, en el sector sanitario, la trans-

formación de plantas en Biofactorías o reutilización de aguas residuales, representa la cúspide de la economía circular: convertir residuos en biometano para nuestras ciudades y agua regenerada para una industria que ya no puede seguir compitiendo por el agua de consumo humano.

El nudo gordiano: Permisología en el desierto.

Sin embargo, aquí reside la gran paradoja regional. Mientras el sector privado y la academia en Antofagasta diseñan proyectos bajo esta lógica de impacto positivo, la institucionalidad pública parece atrapada en una parálisis administrativa.

La “permisología” en la región está poniendo en jaque inversiones críticas. Proyectos de plantas de Litio, parques eólicos, plantas de hidrógeno, plantas de servicios a la industria enfrentan plazos de tramitación que no coinciden con la urgencia climática ni con la ventana de oportunidad económica que el mundo nos ofrece hoy. Cuando un proyecto de impacto positivo —que busca devolver agua al acuífero o limpiar la matriz energética— debe esperar años por un permiso sectorial, la burocracia se convierte, irónicamente, en un enemigo del medio ambiente.

El riesgo es real: que el capital migre hacia otras latitudes con reglas más claras y tiempos más ágiles. La Región de Antofagasta no puede permitirse el lujo de la lentitud. El gobierno tiene el desafío de regular con rigor, pero también de actuar como un facilitador proactivo que entienda que la protección del ecosistema y el desarrollo industrial no son opuestos, sino que se fusionan en el modelo de sostenibilidad 3.0.

La pregunta para los actores regionales es clara: ¿Estamos listos para liderar la sostenibilidad regenerativa? Pero la pregunta para el Estado es aún más urgente: ¿Está su burocracia preparada para permitir que Antofagasta se convierta en la capital mundial de la sostenibilidad, o seguiremos atrapados en trámites que castigan el futuro?

